



Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:  
**Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)**

Para leer el texto completo de la licencia, visita:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/>

**Usted es libre de:**



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

**Bajo las condiciones siguientes:**



**Atribución** — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



**No Comercial** — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



**Sin Obras Derivadas** — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

**DERECHOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE: Una mirada desde  
la justicia de redistribución en el departamento del Chocó.**

**RIGHTS OF THE AFRO-DESCENDING POPULATION: A view from the  
redistribution justice in the department of Choco.**

**María Fernanda Ballesteros Beltrán<sup>1</sup>**

**Resumen:**

El presente artículo propone analizar cómo el Estado Colombiano, a lo largo de su historia a tenido cambios en lo referente a la aplicación y garantía de los derechos de la población afrocolombiana, teniendo en cuenta, diversos factores los cuales son de suma importancia para la evolución de dicha población y cómo ha sido en realidad la adaptación de estos avances normativos en la búsqueda de una aplicación efectiva de sus derechos.

**Palabras Clave:** Multiculturalismo, Grupos minoritarios, Colombia, reconocimiento, afrocolombianos, Departamento del Chocó.

**Abstract:** This article proposes to analyze how the Colombian State, throughout its history, has had changes regarding the application and guarantee of the rights of the Afro-Colombian population, taking into account various factors which are of the utmost importance for the evolution of this population and how the adaptation of these normative advances has actually been in the search for the effective implementation of their rights.

**Key Words:** Multiculturalism, Group minority, Colombia, recognition, afro-Colombians, Department of the Choco.

**Sumario**

Introducción, 1. Multiculturalismo, Reconocimiento y su relación con el Derecho, 1.1 Multiculturalismo y Reconocimiento, 1.2 Derecho- Neoconstitucional, 2. Desarrollo

---

<sup>1</sup> Estudiante de Derecho en proceso de grado, Universidad Católica de Colombia. Correo electrónico: mfballesteros76@ucatolica.edu.co. Código: 2112176. Este artículo fue dirigido por el doctor Jorge Enrique Carvajal Martínez Doctor en sociología jurídica e instituciones políticas, tesis con mención de reconocimiento, Universidad Externado de Colombia. Magister en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional. Especialista en sociología jurídica, Universidad Externado de Colombia. Abogado, Universidad Nacional y Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Distrital.

Normativo en Colombia, 2.1 Desarrollo Normativo Internacional, 2.2 Desarrollo Nacional y Constitucional, 3. Derechos Vulnerados a la Población Afrocolombiana en el departamento del chocó, 3.1 ley 434 de 1998 - paz y conflicto, 3.2 ley 99 de 1993 - ministerio de medio ambiente, 3.3 pobreza, 4. Conclusiones, 5. Referencias.

## **Introducción**

Desde las últimas décadas del siglo XX en occidente se implementó el Estado constitucional social de derecho con ello “se revitalizó el discurso de la democracia, las garantías jurídicas y los principios constitucionales que limitan el poder del Estado, estos aspectos se acompañaron del discurso de los derechos humanos” (Carvajal, 2018, p.102). El neoconstitucionalismo amplió la titularidad de derechos, con ello sectores antes excluidos han logrado el reconocimiento de sus derechos. Este trabajo pretende resolver algunos de los interrogantes que se presentan al escuchar sobre la comunidad o grupo afrodescendiente, los cuales se dan no sólo por sus características sociales y culturales si no también relacionados a su reconocimiento a través del tiempo; pues como hemos visto “la incorporación de minorías étnicas y raciales son las dos fuentes más comunes de diversidad cultural en los Estados modernos. Estas dos experiencias sociológicas hacen necesario diseñar y formular nuevas políticas multiculturales que propicien una mejor integración socio-cultural” (Portales, 2012, p.924).

Así pues, teniendo en nuestro país tanta multiculturalidad es de suma importancia comprender y conocer sus avances normativos, ya que esto nos permitirá identificar cómo a partir de la incursión de la Constitución Política de 1991, se realizan cambios de gran importancia para muchas de las comunidades hoy reconocidas, las cuales son, “los pueblos indígenas, las poblaciones afrocolombianas, incluidas las comunidades raizales de San Andrés y Providencia y la comunidad de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar y el pueblo ROM o gitano”(Hernández Romero, et al , 2007, p.19).

Es por esta razón que se identificará primordialmente si existe un reconocimiento, bien sea positivo, caracterizado por “reconocer las diferencias y las desigualdades existentes entre los sujetos del derecho y la pertenencia a ciertos grupos desaventajados de la sociedad con el fin de implementar acciones afirmativas para la igualación de sus derechos” (Grisales, 2017, p.257) o por otro lado un reconocimiento negativo el cual “clasifica los sujetos y grupos sociales por estatus y clases, entre sujetos normales y

sujetos especiales o, lo que es lo mismo, entre sujetos con derechos plenos y sujetos con derechos incompletos” (Grisales, 2017, p.261), de esta manera comprobando cuál ha sido realmente su relación social y jurídica en el territorio colombiano, así pues, podremos confirmar si el acompañamiento que ha tenido dicho grupo con los diversos mecanismos dados ha sido efectivo, mediante la normatividad y reconocimiento en relación a lo descrito anteriormente, verificando así su aplicación en la búsqueda de derechos básicos, los cuales son el fin primordial de nuestro sistema legislativo.

Junto con lo anterior, daremos a conocer las falencias más notorias que rodean este grupo minoritario, identificando un poco más la diversidad cultural que conforma el país, su avance y reconocimiento normativo, el cual no solo es de suma importancia para nosotros, sino también, para dicha comunidad, la cual tiene gran valor dentro de todo el territorio colombiano.

Llegado a este punto, podremos entonces dar respuesta a nuestra pregunta central, la cual es, DERECHOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE: Una mirada desde la justicia de redistribución en el departamento del Chocó; ya que, como veremos a lo largo de este proyecto dicha comunidad será entendida como una agrupación minoritaria la cual ha logrado ser reconocida, no solo a nivel social sino también normativo dentro del Estado Colombiano, pero, de igual forma comprendiendo cómo a pesar de su lucha constante para la efectividad de sus derechos, el trabajo ha sido dificultoso, ya que en la búsqueda de diversas formas para que sea posible y completo, los resultados han sido poco favorables.

Dicho lo anterior, la hipótesis que se desarrollara en este trabajo, sugiere que a pesar de los avances normativos, constitucionales y sociales hechos para esta comunidad, tienen una característica general, la cual es, que dichos preceptos están plasmados y buscan una aplicación efectiva, pero en su ejercicio y práctica no se ha dado un verdadero cumplimiento, como tampoco concretar o solidificar lo que ha buscado la normatividad por medio de la creación de leyes para este grupo, pues, aun así teniendo en cuenta su avance y dedicación, no es posible solucionar todos los problemas surgente para esta población.

De este modo, podremos identificar el objetivo general de nuestro proyecto, en el que buscaremos evidenciar que, a pesar del desarrollo constitucional y los avances normativos presentados a partir de la Constitución Política de 1991, existen graves problemas por

falta de reconocimiento y redistribución para la población afrocolombiana; así mismo nos centraremos en tres objetivos específicos, los cuales son, en primer lugar, establecer los elementos principales en relación a los conceptos de multiculturalismo, reconocimiento y derecho constitucional. En segundo lugar, presentar el desarrollo normativo que se ha dado para el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes y, por último, demostrar cómo aún se presentan graves problemas frente a la falta de reconocimiento en el departamento del chocó, lugar donde centraremos nuestra investigación.

Así pues, la metodología que se llevará a cabo en este proyecto, se desarrollará en dos formas, en primer lugar, relacionada con la validez, ya que existe una relación directa entre la eficacia del cumplimiento de la norma, su efectividad y aplicación, proporcionada para la comunidad afrocolombiana, de esta forma teniendo afinidad con la eficacia normativa. En efecto, manteniendo el conocimiento sobre el cumplimiento del contenido fáctico de la norma, ya que este ha sido hecho, bien sea para cumplirla o no, dicho lo anterior podremos identificar cual fue su resultado. En segundo lugar, relacionado con la investigación socio jurídica, ya que se ve la semejanza en la categoría de la eficacia, pues esto implica que recurriendo a la relación género-especie, también se ocupa de los problemas en cuanto a la efectividad y eficiencia, los cuales son la base de nuestro objeto de estudio, teniendo en cuenta el nivel de eficiencia de la norma (Agudelo Giraldo, 2018, p.23-35). Para este punto, es importante conocer cuál es el objeto en sí de la investigación socio jurídica, la cual podría entenderse como el estudio de las relaciones entre el derecho y el comportamiento social, teniendo en cuenta su desarrollo y comportamiento dentro de la población, no solo en lo jurídico sino también en los demás ámbitos, a su vez caracterizada por una investigación empírica que recurre a técnicas sociológicas, cuantitativas y cualitativas que permiten comprender cómo el derecho podría materializarse de acuerdo a las características específicas y los resultados obtenidos (Carvajal, 2016, p.32-36).

Para terminar, se identificara como la población afrocolombiana ha logrado conformar una diversidad cultural; es por esto que el artículo se llevará a cabo en tres partes, la primera, de manera conceptual referente a los términos de multiculturalismo, reconocimiento y derecho; la segunda parte del texto abordará los principales aspectos consignados en la Constitución Política de 1991 y leyes que otorgan dichos derechos, por último buscaremos mostrar cómo a pesar de estos avances no se ha dado el reconocimiento suficiente para dicha población en el departamento del chocó.

## **1. MULTICULTURALISMO, RECONOCIMIENTO Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO**

Este capítulo tiene como objetivo conceptualizar las diferentes nociones que tienen relación directa con la población afrocolombiana, pues de esta forma podemos entender su importancia dentro del ámbito del reconocimiento y el derecho en general, dejando así claridad en cuanto a los términos que se desarrollarán; estos, entendidos como el multiculturalismo, reconocimiento y derecho neoconstitucionalista. Por tanto, este acápite se llevará a cabo de la siguiente manera, en primer lugar, el multiculturalismo y reconocimiento como concepto clave para la comprensión de nuestro tema central y luego, el neoconstitucionalismo punto de partida y antecedente para el desarrollo de los conceptos antes mencionados.

### **1.1 MULTICULTURALISMO Y RECONOCIMIENTO**

Colombia es un país que a lo largo de su historia se ha caracterizado por superar algunos problemas dentro del ámbito político, económico, social y jurídico, lo que ha hecho que en su desarrollo histórico siempre este en la búsqueda de posibles soluciones para estos conflictos; ya que en muchos de los casos pueden ser no solo entre particulares si no también regionales e incluso a nivel nacional o grupos determinados. Esto, dándose en el entendido que junto con la presencia de algunas agrupaciones las cuales tienen diferencias ideológicas y culturales respecto de la población general, pueden verse mucho más afectadas; dichos comunidades que serán entendidos como “los pueblos indígenas, las poblaciones afrocolombianas, incluidas las comunidades raizales de San Andrés y Providencia y la comunidad de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar y el pueblo ROM o gitano” (Hernández Romero, et al, 2007, p.19); a partir de esto, tenemos una delimitación sobre algunos de los grupos minoritarios existentes en Colombia, por tal motivo, es importante aclarar que nos centraremos solo en las poblaciones afrocolombianas; pues de esta forma veremos que manejo, solución o suma de conflictos se ven presentes dentro de su entorno social y aplicación normativa, para así poder responder a nuestra pregunta central.

Los grupos minoritarios durante mucho tiempo han tenido exclusión social no solo en Colombia sino en todo el mundo, a partir de esto, nacen diversas formas o mecanismos para encontrar un punto de equilibrio dentro de su ámbito social, para así inquirir una aceptación universal, lo que ha llevado a que nazcan diversos conceptos sobre cómo

realizar este proceso de reconocimiento o incorporación dentro de las sociedades, por lo que a partir de esto, tendremos en cuenta un término bastante particular como lo es, multinación.

El filósofo Will Kymlicka (1996) dentro de su obra, Ciudadanía multicultural: Una teoría liberal de los derechos de las minorías, afirma que,

La noción de nación, en sentido sociológico, está estrechamente relacionada con la idea de pueblo o de cultura; de hecho, ambos conceptos resultan a menudo intercambiables. Un país que contiene más de una nación no es, por tanto, una nación-Estado, sino un Estado multinacional, donde las culturas más pequeñas conforman las minorías nacionales (p.10).

Entonces, a partir de esto podemos preguntarnos si Colombia es un estado multinacional, por lo que a simple vista podría decirse que sí, ya que se encuentra conformado por algunas minorías nacionales, identificadas como los pueblos indígenas, las poblaciones afrocolombianas, etc. las cuales llenan este término y tienen una participación legal y política dentro de nuestro sistema normativo, por lo que de esta forma podría materializarse un poco a la situación del pueblo colombiano en relación con los grupos minoritarios; pues se podría entender el país como una nación multicultural y junto con esto teniendo claro que es un estado social de derecho el cual se caracteriza por la participación democrática liberal y pluralista; dejando claro que una de las bases mencionadas está consolidada y es importante reconocer que la diversidad cultural debe estar protegida por estos parámetros, pues de esta forma se empieza a garantizar los derechos de estas poblaciones.

Otro filósofo que traeremos a colación es Charles Taylor (1993) en su ensayo el multiculturalismo y "la política del reconocimiento", el cual afirma que:

En el plano social, la interpretación de que la identidad se constituye en el diálogo abierto, no que se forma por un guion social predefinido, ha hecho que la Política del reconocimiento igualitario ocupe un lugar más importante y de mayor peso (p.30).

Por lo que,

La exigencia del reconocimiento se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos entre el reconocimiento y la identidad, donde este último término designa algo equivalente a la interpretación que hace una persona de quién es y sus características definitorias, fundamentales como ser humano (Taylor, 1993, p.30)

Entonces, a partir de esto reafirmamos que el factor de reconocimiento es de gran importancia para la aceptación y un desarrollo próspero en el multiculturalismo, en un país con determinadas características como lo es Colombia.

A partir de lo anterior, podemos ver que la incursión del multiculturalismo en Colombia, se permitió mediante,

Políticas públicas y la creación de un marco legal que se encargará de regular y, en teoría, hacer cumplir los derechos y deberes que se les otorgaban a las comunidades representantes de esta diversidad cultural en su acción social y política dentro del marco de un Estado-nación (Cárdenas, 2016, p.78).

Permitiendo así, que la idea del multiculturalismo allá atravesado de manera amplia gran parte del Estado-nación no solo en Colombia, “en la medida en que reconoce y acepta las diferencias culturales para homogeneizar y centralizar el ejercicio de poder sobre las personas que están bajo su jurisdicción político-administrativa” (Cárdenas, 2016, p.79). Así pues, vemos como este precedente normativo nace con un fin primordial demarcado desde sus inicios, para el reconocimiento de este grupo minoritario.

Es este punto podemos ver, que dichas características o rasgos no solo los hacen diferentes, si no que por el contrario son una particularidad, que permite una búsqueda constante del Estado para mejorar e incluir a todas estas poblaciones, brindando de esta forma un reconocimiento más amplio; pues, “el reconocimiento del multiculturalismo y de la multinacionalidad lleva consigo la aspiración a la autodeterminación, esto es, la aspiración al goce de igualdades diferenciadas, así como de un reconocimiento igual” (Sousa santos, 2003, p.115).

En este punto podemos ver que el multiculturalismo y el reconocimiento están directamente relacionados con estos grupos minoritarios; por lo que hablaremos entonces de la identidad cultural, entendida como el reconocimiento y sin duda uno de los puntos más importantes en relación al desarrollo social que tienen dichas comunidades, pues no solo a simple vista se debe tener claro este concepto, sino que se debe apropiar para las



comunidades que pertenecen a esta categoría, es por esto que podría entenderse como, “el sentido de pertenencia, religiosidades, simbologías e históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural” (Robledo Martínez, 2015, p.637), de esta forma, identificando como por medio del ámbito jurídico se buscan incluir y solucionar los problemas latentes que están en cualquier sociedad o para este caso concreto el grupo minoritario objeto de estudio.

Ahora bien a partir de todo esto logramos entender un poco más sobre la relación existente entre el multiculturalismo y el reconocimiento, ya que como podremos ver en el caso Colombiano se manifiesta de varias formas, tal como lo dicen los autores Mara Viveros Vigoya y Sergio Lesmes Espinel en su texto *Cuestiones raciales y construcción de nación en tiempos de multiculturalismo* (2014), los cuales afirman que, “el reconocimiento actual de una etnicidad afrocolombiana, por parte de instituciones como el Museo Nacional, operó en el marco de tensiones entre el deseo de resaltar el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación” (p.19).

Por consiguiente, es posible ver como el reconocimiento llega estar presente para este grupo, lo cual es de suma importancia, pues se empieza a ver un poco más consolidada esta segunda base; de manera similar, algo que podremos traer a colación, son las características propias de este grupo, las cuales “suponen tradiciones culturales propias expresadas en algunas prácticas medicinales, funerarias y musicales particulares, así como de sistemas de autoridad y de gobierno generacional” (Restrepo, 2007, p.477,478). Sin embargo, con todo lo dicho anteriormente en relación a la buena estructuración del multiculturalismo con base en el reconocimiento, ha de resaltarse que “a pesar de que la constitución de 1991 re define la nacionalidad colombiana en función de una diversidad cultural la invisibilidad continúa impidiendo la inclusión de los afrocolombianos y agravando así asimetrías étnicas” (Arocha & Dieck, et al, 1998, p.341).

Atendiendo a estas consideraciones, es importante conocer uno de los censos más recientes, hecho para el año 2005, por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en el que muestran diversos estudios realizados a este grupo. Dentro de todos estos programas hubo una pregunta en especial que encaja justo con lo dicho por Charles Taylor y los autores antes nombrados y es referente al autorreconocimiento por parte de las personas y el grupo al cual pertenecen, pues muchos de ellos en el libro electrónico llamado *Colombia una Nación Multicultural: Su diversidad étnica* (2005)

hecho por el DANE no respondieron o incluso no lo tenían claro, pero, por otro lado algunos sí lo hicieron, como la población en estudio, “Afrocolombianos con un 10,6%” (p.13), dicho porcentaje corresponde al autorreconocimiento por parte de los ciudadanos que conforman esta población.

Junto con esto, según el censo hecho por el DANE, en su texto Jóvenes afrocolombianos: Caracterización Sociodemográfica y Aspectos de la Migración Interna (2005), el cual habla sobre los jóvenes afro-colombianos, dice que “el 99,10% se auto reconoce como Negro(a), mulato, afrocolombiano” (p.7). En síntesis, podemos ver cómo la población afrocolombiana tiene gran presencia dentro del territorio colombiano, pues cuenta con características culturales, sociales y religiosas que la hacen diferente a todas las demás, ya que este reconocimiento a tales tradiciones son las que permiten un avance dentro de todos los ámbitos, de manera constante y continua.

Debido a esto podemos relacionar los objetivos o fines primordiales del multiculturalismo y multinacionalidad, dichos en primer lugar dentro de este capítulo; junto con el término reconocimiento desarrollado previamente, comprobando de esta manera que ahora son tres los términos primordiales para que se dé un equilibrio social y jurídico, pues no solo el reconocimiento permite una inmersión completa dentro de una desigualdad social, si no todos los términos antes mencionados garantizan una equivalencia total del mismo.

### **1.3 DERECHO - NEOCONSTITUCIONALISTA**

En este mismo contexto, es importante referirnos al término neoconstitucionalismo, pues se ve claramente conexo con los términos antes descritos como multiculturalismo y reconocimiento, pues sin duda, nos permitirán entender y percibir su relación con el mismo, marcando de esta forma el proceso que se ha dado para la identificación de estos derechos y su antecedente primordiales.

En primer lugar, empezaremos hablando sobre los antecedentes que marcaron una gran base para el desarrollo de los derechos a modo general de toda la población, pero especialmente para los grupos con características o rasgos diferentes; equivalentes con el término de justicia social, pues podría entenderse como,

Derechos sociales que persiguen la libertad y la igualdad de las personas, entendidas en una realidad plena, lo cual difícilmente se conseguirá para la gran mayoría de las personas, las más débiles socialmente, a menos que el Estado

intervenga garantizando un mínimo digno de nivel de vida o de bienestar a la población (Carpizo, 2012, p.7).

Lo anterior, entendido a nivel global, es decir, en una búsqueda de aplicación a este concepto para cualquier población, sin distinción alguna. Es así como podremos ver una gran base consolidada respecto de la justicia social, término crucial para el derecho neoconstitucionalista y es por esto que veremos su apertura a nivel Latinoamericano, ya que está inició con,

La Constitución Brasileña del año 1989 en la que hay una ola de nuevas Constituciones en toda Latinoamérica, pasando por la colombiana de 1991, las reformas constitucionales de Argentina de 1994 a finales del siglo XIX poco a poco los estados van entrando a un sistema capitalista, que tampoco debe haber sido fácil; pues las condiciones de vida a finales del siglo XIX y principio del XX, nos empujaron hacia el constitucionalismo social (Ávila, 2016, p.23-24).

Ahora bien, es importante precisar uno de los términos citados anteriormente, y es el Constitucionalismo Social, el cual tiene como “objetivos fundamentales: colocar los derechos sociales en el centro del proyecto político y económico en sociedades altamente disfuncionales; diseñar las instituciones y los procedimientos democráticos requeridos para realizar los derechos humanos en su integridad” (Arango, (N.A), p.5). Es por esto, que logramos afianzar los dos conceptos antes desarrollados, pues cobran mayor sentido e importancia dentro de todo lo que es el proceso para las nuevas comunidades que empiezan a ser reconocidas como desiguales dentro de una sociedad, que al identificar dichos fallos empieza la búsqueda de un derecho y justicia social más completo; conforme a lo anterior, podríamos afirmar que, “la Constitución colombiana de 1991 constituye, por lo tanto, el punto de inicio del nuevo constitucionalismo en el continente” (Noguera Fernández & Criado, 2011, p.17).

Se debe aclarar en este punto que Colombia hace parte de este gran cambio pues fue una de las pioneras junto con los otros países antes citados; además es importante reconocer que se adentra en esta búsqueda de igualdad respecto de los grupos que se caracterizaban por tener diferencias culturales, económica, sociales, entre otros, en relación con lo anterior es importante conocer los rasgos comunes que dieron lugar a estos cambios y es por esto que se entenderían, en dos formas que son de la siguiente manera,

Estos serán procesos activados mediante referendo por el pueblo, que suponen un rescate de los principios de soberanía popular y de la doctrina clásica del poder constituyente mediante la elección democrática de una Asamblea Constituyente originaria con funciones de redacción de un proyecto de Constitución que debe someterse a ratificación popular (Noguera Fernández, & Criado, 2011, p.18).

De manera que, podemos ver como el avance normativo en Latinoamérica fue de suma importancia, esto quiere decir que no solo en Colombia se permitió o se dio el gran paso para el reconocimiento de estas población que presentan desventajas, no solo a nivel social, sino también económico y jurídico, es por esto que estas, debieron caracterizarse “por variedad de principios y valores, que establecen estándares de moralidad, ocasionando que el estudio del derecho no sea una simple actividad científica u objetiva” (Osorio, 2017, p.19).

Igualmente logramos ver cómo todo este cambio a nivel latinoamericano, logró un giro total en la perspectiva de los derechos a las poblaciones, pues si bien antes no se tenían como objetivo primordial, se empiezan a ver más reconocidas por esta variación de pensamiento o normatividad del nuevo neoconstitucionalismo, es por esto que vemos oportuno traer a colación dos definiciones, de lo que es en sí el término Neoconstitucionalismo, ya que hemos mostrado un poco lo que fueron sus conceptos bases para este cambio, pero ahora es importante saber concretamente cuál es su noción; por lo que en primer lugar, podría entenderse como,

Una tendencia característica de los sistemas democráticos más o menos consolidados, frente a inercias algo más atrasadas en el resto del mundo, donde una gran parte de los países se limitarían a tener simples Constituciones fachada que, en la práctica, no aseguran la vigencia efectiva de sus mandatos (Porrás Nadales, 2017, p.410-411).

En segundo lugar, tenemos el autor Hernán Hermosa Mantilla en su texto El Neoconstitucionalismo Andino (2014) el cual dice que,

El neo constitucionalismo surge como el nuevo ordenamiento de una sociedad que busca corregir errores conceptuales o de procedimiento en la carta vigente. El primer aspecto sustancial de ese cambio es la interpretación colectiva del tradicional derecho individual que prevalece en otras constituciones y la

incorporación de conceptos como la plurinacionalidad, la democracia comunitaria, la justicia indígena, la interculturalidad (p.152).

Con lo dicho anteriormente, podemos ver como toma más sentido la definición de justicia y derecho social, la cual nos permite identificar primordialmente lo que se buscaba y en si el objetivo principal del Neoconstitucionalismo, pues por medio de estas se da la incursión a esta nueva forma de ver el mundo o las diferentes poblaciones existentes; no solo a nivel nacional sino también Latinoamericano permitiendo que en la práctica se diera una búsqueda de aplicación efectiva a los nuevos derechos o reconocimiento de garantías judiciales en pro de poblaciones vulnerables o con desventajas sociales, pues “las personas tienen el derecho a ser iguales cuando la diferencia las haga inferiores, pero también tienen el derecho a ser diferentes cuando la igualdad ponga en peligro la identidad” (Boaventura de Sousa Santos, 2000, p.81).

En consecuencia, este capítulo nos muestra cómo al desarrollar los términos de multiculturalismo entendido como la posibilidad de que exista diversidad cultural, tradicional e ideológica en una población; reconocimiento como las características que identifican y hacen únicas estas agrupaciones y finalmente el neoconstitucionalismo que podría entenderse como el puente que permitió el cambio de perspectiva en la búsqueda de mejorar la desigualdad de estos ciudadanos, concedieron todo un cambio no solo normativo a nivel interno, sino también a nivel Latinoamericano, pues en este punto se empiezan a brindar garantías que antes no eran reconocidas.

Por tal motivo, con los términos desarrollados, vemos cómo se crea una gran base que permite la asimilación y adaptación por parte del Estado en cuanto a diversidad no solo cultural y étnica, sino también otras de gran trascendencia como lo son las tradiciones que van ligadas directamente al reconocimiento teniendo en cuenta a Colombia como país pionero de grupos que tiene desventajas sociales, el cual debe cumplir y demostrar la efectividad de los métodos o programas que acogieron para que esta desigualdad disminuya en relación con su aplicación a los tres términos desarrollados dentro de este capítulo, pues sin duda estos demarcan un lineamiento de lo que se espera puede desarrollarse en el camino para erradicar estos quiebres o falencias no solo sociales sino también normativas respecto de determinados grupos.

## **2. DESARROLLO NORMATIVO EN COLOMBIA**

En esta segunda parte se dará una perspectiva de lo que ha sido el desarrollo normativo en Colombia, teniendo en cuenta sus leyes, las cuales han marcado un precedente para nuestro tema central, por lo que tendremos en cuenta la primera parte de nuestro escrito, pues ligando todos los conceptos y normatividad que se mostrará, podremos finalmente ver si han sido del todo efectivas o si por el contrario aún persisten falencias dentro de su aplicación. Por tanto, este acápite se desarrollará de la siguiente manera, en primer lugar, el desarrollo normativo a nivel internacional que se ha dado en relación a la población afro colombiana y luego el desarrollo nacional y Constitucional, para así identificar la relevancia en cuanto a su reconocimiento e inclusión.

## **2.1 DESARROLLO NORMATIVO - INTERNACIONAL**

Es importante en este capítulo realizar una pequeña síntesis de lo que han sido las leyes como antecedentes que marcan una pauta para el inicio y continuación del reconocimiento de los grupos minoritarios, por lo que empezaremos estudiando a nivel internacional, cuáles fueron, para luego centrarnos en los antecedentes de nuestra constitución.

Los convenios o tratados internacionales cobran gran importancia, ya que con estos se empieza a dar reconocimiento, como también una búsqueda igualitaria para determinadas poblaciones, dejando en su desarrollo pautas claves que son de suma importancia para esta población; por lo que es importante tener conocimiento de algunas de ellas y es por esto que las traeremos a colación. En primer lugar, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual está relacionado con las comunidades negras, indígenas y tribales; dicho acuerdo está ratificado por Colombia con la ley 21 de 1991, este ha de tenerse en cuenta ya que en relación a su artículo 1, Numeral 2 dice que “La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”(Ley 21,1991) y de igual forma su artículo 2, el cual busca proteger los derechos de estas poblaciones y garantizar el respeto de su integridad; por lo tanto, para esta época ya se empezaba a reconocer de alguna forma dichos grupos minoritarios de forma legislativa, lo que permitió empezar a delimitar el rumbo normativo que podrían llegar a tener con el inicio de estas leyes, pues el camino que se tomaría estará demarcado en torno al objetivo de las mismas, los cuales eran garantizar y reconocer dichas poblaciones.

Así mismo, está el Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales, Ley 74 de 1968, en el que los estados se obligaban asegurar la igualdad para poder garantizar derechos civiles y políticos, tanto a hombres como mujeres sin importar su condición o características que los definieron, esto, en el entendido, que se daría bajo la inclusión de todas las poblaciones dentro del territorio sin distinción alguna, para así poder garantizar los derechos antes mencionados sin excepción.

Por otro lado, la Ley 22 de 1981 denominada Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las discriminaciones raciales, la cual se convierte en el puente que permite un cambio en la perspectiva a lo referente con diferencias sociales, culturales y tradicionales, pues, teniendo en cuenta su artículo 2, dice que los estados “condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas” (Ley 22, 1981).

Esto nos deja identificar entonces como Colombia busca mediante diversos modos, en este caso ratificándose en diferentes convenios, garantizar el equilibrio para esta población, en primer lugar en cuanto a su reconocimiento e inclusión y junto con este lo referente a los derechos que se esperaba fueran amparados, tales como, derechos civiles y políticos; finalmente la eliminación de todo tipo de discriminación y la iniciativa a buscar una adaptación entre todas las poblaciones existentes, por lo que ha de reconocerse en este punto que se da un gran paso para poder distinguir y proteger sus valores, tradiciones y costumbres, característicos de su cultura.

## **2.2 DESARROLLO NACIONAL Y CONSTITUCIONAL**

La Constitución Política de 1991 nos muestra una nueva etapa que nace con unos ideales más amplios en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como también en los ámbitos jurídicos y políticos, en primer lugar podemos ver, que Colombia al ser un Estado social de derecho tal como es descrito en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, maneja un término, de suma importancia, denominado, cualitativo, el cual hace referencia a la democracia ya sea representativa o participativa, en el que se desprenden diversos mecanismos, establecidos en el artículo 103 de nuestra Constitución Política y los establecidos en la ley 134 de 1994, que ha de resaltarse son 9 medios, entonces se podría

hablar que las posibilidades para participar son muchas independientemente de la sexualidad, raza o estrato social al que se pertenezca, pues están dispuestos en la ley para ser ejercidos por cualquier particular sin alguna distinción.

Además, se puede tener en cuenta de igual forma el artículo 5, el cual dice que: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”, entendiendo los derechos inalienables como los consagrados en el Capítulo I de nuestra Constitución, por lo que el reconocimiento e incursión se podrían vasar en estos dos artículos, bases del sentido normativo Colombiano, igualmente lo podremos ver en la Sentencia T-401 de 1992, la cual dice que, “La dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución” (Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, T 401, 1992), por lo que en relación a este punto podemos ver cómo a pesar de los años este principio sigue guiando parte del ordenamiento jurídico.

Es por esto que podemos observar cómo al ser un conjunto el cual forma una de las grandes bases de la normatividad colombiana, podrían definirse entonces como fundantes y necesarias para cualquier acontecimiento que tenga relación con el ejercicio de algún derecho; pues, los “derechos fundamentales, constituyen la expresión más directa e inmediata de la dignidad de la persona humana y de los valores de libertad e igualdad, como expresión jurídica de un sistema de valores que constituye el fundamento del ordenamiento jurídico colombiano” (Mendieta & Tobón, 2018, p. 283).

De esta forma podemos percibir que en un país como Colombia se ha pensado en gran medida, diversas formas para crear modelos y medios que permitan la inclusión de todos los grupos y en general de la población, para que así puedan hacer parte del sistema político, social y jurídico que se tiene, pues, “las organizaciones indígenas colombianas se destacan por su voluntad de acercamiento a sectores no-indígenas para proponer una transformación de fondo de la sociedad al lado de campesinos, obreros, sindicalistas, estudiantes y organizaciones de mujeres” (Laurent, 2016, p.153), manifestando así los cambios positivos que pueden llegar a tener diferentes poblaciones no solo en este caso la comunidad afrocolombiana, sino todas las demás existentes, en la búsqueda para la inclusión o reconocimiento.



Es así como podemos ver que el nacimiento del multiculturalismo y su relación directa con el reconocimiento permitieron una relación estado-grupo minoritario más efectivo, pues si bien antes no se tenían varias garantías teniendo en cuenta que Colombia ya realizaba tratados para suplir estas falencias, con el nacimiento de la Constitución Política de 1991 se da un cambio radical ante esta situación, ya que este es el punto de partida a la inclusión de diversos derechos en el sentido económico, social y lo más importante para nosotros en lo cultural, político y jurídico, relativo a los diferentes grupos minoritarios que se encontraban y aún siguen vigentes dentro de la sociedad, dichos cambios como lo vimos anteriormente son reconocidos por algunos autores, pues en todo proceso siempre se busca una constante mejora, como es el caso.

Ahora bien, en cuanto a los antecedentes nombrados, podríamos decir que fueron de gran ayuda para el nacimiento y la expedición de los derechos consagrados en la Constitución Política de 1991, pues estos buscaban el reconocimiento y garantía de derechos civiles para esta población, dichas leyes a nuestro modo de ver marcaron un precedente importante ya que con su nacimiento, permitieron crear una relación entre este grupo minoritario y sus inicios en cuanto a su reconocimiento normativo, sin embargo, debemos recordar que “Colombia es un país que consagra múltiples derechos, pero también es uno de los países donde más se violan y se desconoce”(Rodríguez, 2008, p.220). Por lo que ahora, es importante conocer el marco jurídico que lo rige y es por esto que empezaremos con un recorrido cronológico de lo que ha sido para esta comunidad afrocolombiana. Pues bien, como ya vimos anteriormente el reconocimiento a nivel internacional y nacional respecto del grupo objeto de estudio ha sido notorio, pues en el área social, laboral, cultural y económico se hicieron grandes avances; por lo que es importante para nosotros no solo haber mencionado dos artículos que son transversales a cualquier derecho que se ampara en Colombia sino que también consideramos deben conocerse cuáles son los que primordialmente reconocen dichos avances y se garantizan ante esta comunidad.

Podríamos empezar, por los artículos que demarcan este cambio, pues tal como lo dice Lucía Arbeláez de Tobón en el documento justicia de paz y derecho indígena: análisis y propuestas de coordinación (2004), estos serían sin duda los artículos que habrían de resaltarse, pues cobran mayor importancia en relación con el grupo minoritario objeto de estudio, los cuales son, el artículo 7 en el que, de manera más precisa se consagra que, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, luego, el artículo 8, el cual relaciona el reconocimiento a la diversidad en cuanto a la protección

de lo cultural y riquezas naturales, después, tenemos el artículo 13 el cual prohíbe la discriminación positiva a favor de los grupos minoritarios o marginados; en el artículo 63 se otorga el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables de las tierras comunales de grupos étnicos, finalmente está el artículo 70 el cual precisa a la cultura como cimiento de la nacionalidad (p.7).

Teniendo claro lo anterior, la identificación de los artículos base para la relación grupo minoritario - Estado se ve presente dentro de toda la carta política, pues pudimos observar que su inclusión e implementación a través del tiempo ha sido constante, es por esto que veremos ahora las leyes posteriores al nacimiento de la constitución, ya que con estas se empezaron a forjar cambios radicales para el reconocimiento y garantía de derechos, lo cual demostrará que ha sido constante su avance y desarrollo, en la búsqueda de los vacíos normativos existentes para esta población.

Ejemplo de lo dicho anteriormente, es la ley 70 de 1993 ya que tiene como objeto de acuerdo a su artículo primero, “reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción [...]” (Ley 70,1993). Aquí podemos ver un gran precedente y el cómo se brinda un reconocimiento a dichas comunidades en cuanto a su cultura, propiedad y presencia dentro del territorio colombiano, aceptando una diversidad étnica latente que busca ser amparada por las garantías constitucionales brindadas por el estado.

Seguido a esto, tenemos la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA la cual en su artículo número trece, dice que se tendrá un representante de las comunidades negras en cuanto al consejo nacional ambiental, de esta forma garantizando la participación de dichas comunidades dentro del orden nacional, en este punto afianzando una intervención jurídica y política por parte de dichas poblaciones.

Para el año 1998 tenemos la Ley 434, con la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, donde su artículo 4 brinda un reconocimiento en cuanto a otra forma de participación a dichas comunidades, pues se debe elegir “un representante por las organizaciones indígenas nacionales y un representante elegido por las organizaciones nacionales de las

comunidades negras”, reiterando en este punto la búsqueda para garantizar una participación política.

Teniendo más claro todo el avance normativo que ha realizado el Estado Colombiano para poder hacer posible el reconocimiento y garantía de diversos derechos no solo a los grupos minoritarios, sino en específico la comunidad afrocolombiana, es importante saber la definición que los adopta, pues se podría entender, como “los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional urbano-rural, de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica” (Grueso,2007, p.4).

Llegado a este punto, es importante para nosotros traer a colación también, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) ya que se ha encargado de expedir diversos documentos referentes a las comunidades afrocolombianas, las cuales son de gran importancia para este proyecto, pues nos demostrarán o nos permitirán conocer qué temas u objetivos, han sido identificados para el estudio de esta comunidad.

En primer lugar, tenemos la política para la población afrocolombiana 3169 de 15 de julio de 2002, en la que se identifican las falencias, lugares que habitan y los demás factores que puedan afectar dicha población, reconocido así los quebrantos que tienen estos habitantes. En segundo lugar el programa de apoyo para el desarrollo y reconocimiento étnico de las comunidades negras 2909 de 26 de febrero de 1997, en la que se aclara que las comunidades afrocolombianas y raizales “han efectuado aportes significativos al desarrollo colombiano a través de su cultura, caracterizada por la riqueza y diversidad, la contribución a la producción nacional y la protección del medio ambiente” (Departamento Nacional de Planeación,1997) y demostrando “una convivencia pacífica, de relaciones armónicas con la naturaleza, de solidaridad ciudadana y de conocimiento profundo de los recursos naturales”((Departamento Nacional de Planeación,1997), es así como se reconoce la riqueza cultural y social que tiene esta comunidad, la cual ha enaltecido las tradiciones Colombianas.

Más sin embargo, frente a la diversidad etno-cultural colombiana y todo el reconocimiento que se le presta a las Comunidades Negras y afrocolombianas , no ha sido suficiente y, por tanto, no participan efectivamente en las decisiones del país, pues si bien, la normatividad que las acompaña es bastante y su desarrollo normativo ha sido notorio,

no debemos olvidar que una de las características de esta población es la desigualdad o el desequilibrio al que están expuestas aun en la actualidad y es indudable que se encuentran múltiples quiebres en su aplicación, pues si bien vimos todos los mecanismo y derechos que los que son acreedores, la falta de efectividad de los mismos es evidente; por lo que podríamos decir entonces que Colombia a lo largo de su historia ha intentado constantemente buscar soluciones o apoyo en diferentes medios para corregir los quiebres o vacíos existentes en su normatividad, para dar de cierta forma el apoyo necesario a estas comunidades, por lo que, este capítulo mostró de forma resumida y puntual, las normas que de cierta forma proporcionan más efectividad o dan gran trascendencia a lo relacionado con las comunidades afrocolombianas.

### **3. DERECHOS VULNERADOS A LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**

Para el desarrollo de esta tercera parte, debemos tener como base, los dos acápites anteriormente expuestos, pues al ampliarlos, efectivamente hemos logrado observar e identificar como la Constitución Política de 1991 se ha enmarcado en todo un avance y reconocimiento normativo, en lo relacionado con los diversos grupos que pueden llegar a existir en una sociedad, los cuales pueden encajar dentro de la multiculturalidad que está presente en el territorio, además, hemos identificado como éste término es de gran importancia y reconocemos que es un gran avance, en lo que tiene que ver con las comunidades afrocolombianas.

Sin embargo, debemos aceptar por otro lado, que a pesar del reconocimiento y avance no sólo normativo sino social, tradicional, económico y político, estas poblaciones, tienen algunos fenómenos particulares, los cuales desarrollaremos en este acápite de la siguiente forma, en primer lugar, la relación existente con la ley 434 de 1998, pues esta nos permitirá tener un modelo de lo que ha sido en su aplicación, referente a la paz, luego, el medio ambiente de acuerdo a la ley 99 de 1993 y finalmente, la pobreza un término que se ve directamente relacionado cuando se habla de las poblaciones afrocolombianas y en especial en el departamento del chocó.

Ahora bien, es importante recordar que “las tres zonas con amplia mayoría de población afrocolombiana son el Pacífico, Bolívar y Urabá” (Urrega,2005), es por esto que nos

centraremos en el departamento del chocó, pues teniendo en cuenta el ministerio de cultura en su texto Afrocolombianos, población con huellas africanas, dice que dichas comunidades, “se concentra en el departamento del Chocó con el 6,69% (285.964 personas)” y en cuanto a la densidad de dicha población “con un 76%” (2010, p.3), lo cual significa que la mayoría de este territorio está poblado por dicho grupo, es por esto que le damos tal importancia para elegir este departamento, pues en mayor medida, es el territorio que más población afrocolombiana tiene.

### **3.1 LEY 434 DE 1998 - PAZ Y CONFLICTO**

El conflicto en Colombia, sin duda ha sido uno de los temas con más relevancia durante los últimos años, es por esto que en la búsqueda para solucionar dicho problema, el Estado se ha encargado de crear entidades o planes que diriman o disminuyan dicha disconformidad, por tal motivo se crea el Consejo nacional de paz mediante la ley 434 de 1998 y es importante resaltar cuál es su objeto, pues como veremos, está plasmado en su artículo primero y expresa lo siguiente, “propender por el logro y el mantenimiento de la paz, y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado” (Ley 434 de 1998), junto con este, es importante de igual forma identificar que sus fines primordiales son tres, en primer lugar como “Órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional, segundo, como asesor de la política de paz, reconciliación y convivencia y en tercer lugar, ayuda a facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado en el tema” (Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, 2019).

Por consiguiente, no podemos dejar pasar desapercibidas las diversas situaciones que se han dado en dichas poblaciones, pues el tema de la paz, sin duda ha tenido gran acogida durante los últimos años dentro del territorio colombiano y en específico, el departamento del chocó, pues dicho territorio, se ha visto directamente afectado, por las diversas modalidades que se dan dentro de su entorno, tales como, los “homicidios, desapariciones, asesinatos colectivos, las masacres, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, el confinamiento, la destrucción de la cultura y el debilitamiento de mecanismos de organización son los factores del conflicto armado en los territorios de las comunidades afrocolombianas” (Pardo Guzmán, et al., 2012, p.57). Así pues, es importante para nosotros hacer un pequeño recorrido histórico, en relación algunos acontecimientos que han sido producto del conflicto en este departamento.

El diario verdad abierta en su artículo llamado: El Baudó, Chocó: dos décadas de intensa guerra, nos cuenta como para el año 2000, se da “la creación del Bloque Pacífico, agudizando la situación de violencia en ese rincón del Chocó, ya que las acciones paramilitares produjeron decenas de desplazamientos masivos, algunas de tal magnitud que terminaron por desaparecer pueblos enteros. Tal fue el caso de San Luis, un poblado de 150 personas ubicado pocos kilómetros antes de llegar a Pizarro” (2016). Luego para el año 2002, se presentó una de los mayores acontecimientos en el departamento del chocó, el cual marcó la historia de Colombia, reconocido como la masacre de Bojayá tal como lo dice el medio de comunicación la BBC en su artículo: “Bojayá, la población donde las FARC cometieron una de sus peores masacres y que votó abrumadoramente por el Sí” y narran que,

A pesar de los pedidos de auxilio desde las poblaciones y de una alerta de la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas no se hicieron presentes y es así como hacia las 10:30 de la noche una de las pipetas de gas atravesó el techo de la iglesia, donde unas 300 personas se refugiaban y produjo la muerte de 79 personas en ese lugar: 41 mujeres y 38 hombres, la mayoría menores de 18 años (BBC,2016).

Más adelante para el año 2009, debemos tener en cuenta los enfrentamientos o combates entre la Fuerza Pública y la guerrilla del ELN, pues “por ejemplo más de 700 personas, entre negros e indígenas del Alto Baudó, huyeron de sus tierras; los desplazados terminaron concentrándose en una localidad de la misma zona llamada Santa Catalina de Catrú. Muchos aún permanecen allí” (Verdad abierta,2016). De igual forma para el año 2013, según los registros de la, “Red Nacional de Información de la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas, 1.800 personas salieron forzosamente del Alto, Medio y Bajo Baudó” (Verdad abierta,2016).

Según el autor WILLIAM SPINDLER, en su artículo llamado: Aumenta el desplazamiento forzado en el departamento del Chocó, en el oeste de Colombia, dice que para el año 2016,

7.000 personas han visto gravemente restringida su movilidad a causa de los combates, que se concentran en torno a las riberas de los ríos Baudó, Atrato y San

Juan. Hasta la fecha, el desplazamiento ha afectado principalmente a la población afrocolombiana e indígena (Spindler, 2016).

En consecuencia, logramos ver como la falta de presencia por parte del Estado ha sido notoria y tangible, pues los hechos en los que se han tenido que ver involucradas estas poblaciones han dejado como resultados múltiples muertes, desaparecimientos y desplazamientos, que afectan en gran medida el desarrollo no solo de los menores que conforman estos territorios, sino también adultos, adultos mayores, mujeres, entre otras, además, podemos inferir que sin duda dentro del Departamento del Chocó se identifican claramente las modalidades mediante las cuales se dan estos actos de violencia, que, aún hoy día siguen latentes, pues diversas situaciones se siguen generando en relación al conflicto.

No obstante, debemos traer a colación el acuerdo de paz firmado en el año 2016, pues se ve directamente relacionado con las situaciones y problemática antes expuestas, ya que, a pesar de que en “el Acuerdo de Paz se pactó un capítulo étnico, no se han habilitado espacios adecuados de concertación con afrodescendientes y pueblos indígenas, ni se han adoptado las medidas en él contempladas para la satisfacción de sus derechos” (Anónimo, 2018).

Dicho lo anterior, corroboramos que la falta de presencia por parte del Estado es notoria y evidente, en cuanto a las falencias que hoy día son reconocidas a nivel nacional, pues sin duda el departamento objeto de estudio se caracteriza por la violencia presente a lo largo de estos años y esto quiere decir también que en todas las etapas de su vida como individuos, ya que sin duda el estado no ha logrado garantizar la mayoría o al menos una parte de sus derechos, pues tal como lo dice el congresista Iván Cepeda Co- presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes “El Chocó ha sido doblemente castigado, por un lado el conflicto y por el otro el olvido” (Anónimo, 2013).

Por lo anterior, es importante identificar algunos conflictos que se han dado, aún después de haber firmado este acuerdo, entonces debemos hablar de lo que fue el año 2018, pues el periódico El Tiempo informó a sus lectores sobre la Diócesis de Quibdó,

La cual emitió una carta abierta en la que expresa preocupación por las cifras crecientes de asesinatos en ese municipio y le solicita al Gobierno nacional para

una acción articulada y estructural a corto, mediano y largo plazo con el objetivo de solucionar los problemas de inseguridad y violencia que se padecen en este territorio (El tiempo,2018).

Luego, para el año 2019, no encontramos situaciones o noticias diferentes a las relacionadas con conflictos y muertes. En el departamento del chocó, pues esta vez el Diario el Espectador, informó a sus lectores sobre la denuncia que hacen al recrudecimiento de la violencia y la crisis humanitaria en Chocó, pues manifiestan que los hechos de violencia “provocados por enfrentamientos entre actores armados han afectado a 7.000 personas y causado la muerte de al menos ocho menores de edad. Las comunidades le solicitan al Estado que intervenga y garantice la protección de sus derechos” (El Espectador, 2019). Además, junto con esto, en el mismo reportaje dicen que, “pese a las constantes denuncias hechas desde el territorio y los informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo, la crisis social es cada vez peor” (El Espectador, 2019).

También, debemos tener en cuenta los hechos ocurridos para este año con los líderes y lideresas sociales, pues el, “Ejército Nacional informó que en el departamento el esclarecimiento de crímenes contra líderes y lideresas sociales es de aproximadamente 70%.” De los 8 asesinatos registrados en lo corrido de 2019, seis fueron resueltos y, de ellos, dos ya tienen sentencia condenatoria (Alto comisionado para la paz,2019).

En efecto, es importante entender, con todo lo mencionado anteriormente, que dichas comunidades quieran y deseen reclamar sus derechos pues las atrocidades que la guerra ha causado en sus territorios, no son de una naturaleza común y es entendible que exigen no solo el cumplimiento de derechos a los cuales todos tenemos acceso, sino también a todo lo relacionado con el acuerdo de paz, pues podemos ver que este tiene una relación directa con dichos conflictos, pues aun después de firmado este acuerdo, se esperaba garantizar no repetición, demás factores y aun así los conflictos y delitos cometidos a esta población siguen siendo un hecho notorio para toda la comunidad colombiana, la cual hace caso omiso o evaden su responsabilidad con los mismos, en estas situaciones, por lo que nos lleva a entender que la paz y el desarrollo no se ha materializado aún en esta región.



Sin embargo, es importante hacer alusión algunas entidades las cuales intentan que todas estas situaciones sean menos dolorosas o traumáticas, tal como la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues esta apoya a los líderes del departamento, por ejemplo, para el 14 de septiembre del año 2018, se reunieron con el fin de,

Trabajar con las mesas indígenas y de las comunidades afrodescendientes para conocer los problemas de todos estos territorios que en un momento estuvieron dominados por un grupo armado y que en este preciso instante quiere ser cooptados por otros grupos ilegales, que tienen especial interés en el negocio del narcotráfico y que no permiten que las comunidades vivan en paz (Alto comisionado para la paz, 2018).

En este orden de ideas, vemos como los conflictos y la falta de presencia Estatal es incuestionable, como se relató anteriormente, desde el año 2000 los conflictos por los que han tenido que pasar estas poblaciones han sido catastróficos, pues estos hechos no solo causan traumas en la población sino también marcan su historia y es notorio ya que, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el departamento del chocó, dice que la población expulsada para el año 2002 , en este departamento, es de “39.606” personas, luego para el año 2004 la suma de “16.954” y finalmente en el año 2014 la suma de “17.299” (Unidad de víctimas,2019).

Observando lo anterior, podríamos entonces decir que el desplazamiento o la salida de estas poblaciones, es dada por la presencia de masacres, desapariciones forzadas e inseguridad social, jurídica entre otras; aun hoy día el conflicto sigue presente y afecta en diversas modalidades esta agrupación, pues teniendo en cuenta la información anteriormente expuesta, dichas situaciones en este departamento no han disminuido en gran medida o incluso si lo han hecho no son coherentes con todos los mecanismos que se han intentado aplicar a dicho problema, aun, habiendo normas que creen entidades destinadas específicamente a solucionarlos o como lo es en otros casos, realizar puentes que permitan la comunicación más cercana en cuanto a los problemas de dicha población, teniendo en cuenta que todos estos factores desencadenan un sin fin de problemas tales como falta de presencia escolar, descomposición de familias, entre otros y las soluciones mediante las cuales el Estado intenta finiquitarse, no han sido efectivas; de esta forma, entendemos cómo la población del chocó en lo relacionado con el conflicto y la paz sigue

aún carente de todo el desarrollo normativo que esperan cumplir, pues en relación a este acápite, es notorio el atraso en la efectividad de sus derechos.

### **3.2 LEY 99 DE 1993 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE**

El avance normativo en cuanto al derecho ambiental ha evolucionado en gran medida durante los últimos años, con referencia no solo a los principios y acuerdos nacionales e internacionales, relacionadas con los recursos naturales renovables, los recursos biológicos, entre otros; es por esto que, con el nacimiento de la Ley 99 de 1993 se crea el ministerio de medio ambiente, el cual tiene por objeto “orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán [...]” (Decreto 3570, 2011).

Por lo anterior, es importante tener en cuenta su objeto principal, pues en el desarrollo de la misma se dio la creación de varios entes encargados para cada departamento, en el caso del chocó, está la autoridad ambiental denominada CODECHOCÓ (Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó) la cual tiene como misión, “Ejercer como máxima autoridad ambiental y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y los Recursos Naturales Renovables [...]” (CODECHOCO, 2019).

Por lo anterior ya tenemos un poco más claro, lo que introdujo esta ley y la importancia con referencia a los recursos naturales a modo general, pero de forma específica la creación de lo que es la última entidad antes nombrada, pues esta nos permitir identificar y delimitar los problemas existentes en esta población; por lo que nos centraremos en dos problemas latentes, en primer lugar, la minería ilegal y seguido a este los residuos de madera en la zona de estudio.

En principio el ministerio de ambiente, dice que “por cada gramo de oro ilegal, queda una tonelada de tierra contaminada con cianuro, con ácido sulfúrico y con plomo, dejando a su paso un impacto devastador en el medio ambiente,” además dice que “el Chocó es uno de los departamentos más golpeados por la minería criminal” (Ministerio de Ambiente, 2016).

Dicho lo anterior, según el autor Otoniel Burgos claros en su texto Eficacia Jurídica del derecho al ambiente sano en acciones contra la minería ilegal de la Policía Nacional Colombiana, dice que,

Las afectaciones ambientales que se identificaron en la parte central de la cuenca, fueron la contaminación física en las fuentes hídricas y el alto nivel de sedimentación en las fuentes, cobertura vegetal, alteración en el hábitat de la fauna y la flora, y las afectaciones en el componente social de la región (2018, p.2).

Junto con esto, es importante tener en cuenta también el término actividad minera artesanal, ya que al hacer uso de motobombas en el municipio del canton del san pablo, y en especial en la parte central de la cuenca, al desarrollarse sin ninguna práctica de cuidado de los recursos naturales en los últimos años ha generado impactos negativos altamente significativos sobre el medio, lo cual logro según la autora Laura Dissa Rivas (2015) que,

La inadecuada distribución de la riqueza, genere que la minería se convierta en una fuente atractiva de ingresos, lo cual ha dado como resultado el gran deterioro ambiental, el cual sufre hoy día la región y específicamente la microcuenca, a la que se suman los conflictos sociales de orden público, los cuales conllevan a estrictos problemas de pobreza (p.135).

Una vez explicado lo anterior, de una manera amplia se puede ver los efectos que puede tener este tipo de actividad; pero en este punto, es importante traer a colación un poco de lo que ha sido el proceso normativo en lo referente a el manejo por parte del estado a este tipo de actividad, ya que de esta forma podremos ver materializado la presencia o no por parte del mismo.

En el año 2010, el Congreso de la República expide la Ley 1382, con la cual se modifica el Código de Minas, es importante resaltar su artículo 12 y 30, pues estos enmarcan lo que es la legalización en cuanto al tema de minería, en particular su artículo 30, el cual dice que,

En los departamentos contemplados en el artículo 309 de la Constitución nacional y en el Chocó, donde existe la pequeña minería, mediante el método de mini dragas de motores hasta de 60 caballos de fuerza, el Estado les dará especial protección para la continuidad en el ejercicio de esta tarea y tendrá un plazo de hasta dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley, para legalizar dicha actividad” (Ley 1382 de 2010).

Por lo que en este punto vemos cómo existe un vacío en la norma, pues, en el desarrollo de esta actividad si no se realiza con el acompañamiento, proceso técnico, personal o especial y calificado, la falta de estos para el buen manejo del río, lugar donde se da la minería, podría entonces llevar a la población a incurrir en lo que sería una minería informal, ya que esta se puede entender cómo, “una actividad que se realiza de forma artesanal sin las exigencias de las normas establecidas, pero en zonas no prohibidas, donde se abre la posibilidad de iniciar un proceso de formalización ”(Malamud, 2018. p. 34).

Con el fin de aclarar ciertos cambios, es importante mencionar, que los artículos anteriormente citados fueron declaradas inexecutable de acuerdo a la sentencia C 331 de 2012, pues,

Resulta violatorio del derecho a la igualdad –art.13 CP- y del debido proceso administrativo –art.29 Superior-, respecto del trámite y procedimiento para la legalización de la minería informal y tradicional de que trata el artículo 12 de la Ley 1382 de 2011 y del procedimiento para el reconocimiento de pequeña minería de comunidades negras asentadas en el Chocó, de que trata el artículo 30 de la Ley 1382 de 2011 (Corte Constitucional, Sala Plena, 09 de mayo de 2012).

En consecuencia, aquí se empieza a ver como la falta de una buena concepción y creación de la norma, deriva en problemas a grandes escalas; por lo que no sólo nosotros identificamos la presencia o falta de igualdad, sino también la Corte al expresarlo en la sentencia anteriormente citada donde se debe buscar la igualdad respecto de esta pequeña población, por lo que en razón a ello todas estas normativas tuvieron que ser modificadas, pues productos de estas actividades se estaban generando diversos problemas los cuales

en algún momento pueden ser irreversibles, es por esto, que nace la Ley 1450 de 2011, la cual manifiesta en su artículo 106 que,

Se prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, mini dragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional [...]. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite para legalizar la minería con mini dragas a que se refiere el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010, serán rechazadas de plano por la autoridad minera (Ley 1450 de 2011).

De esta manera, el Estado demuestra su búsqueda para poder materializar y garantizar su presencia dentro del territorio, pero los resultados a diversos estudios, demuestran realidades completamente diferentes en relación con la minería ilegal, pues para el año 2015 el “Registro Único de Comercializadores de Minerales informó que solamente el 17% de la explotación total del oro es realizada por productores registrados y no hay cifras claras sobre la cantidad de dinero que controlan los grupos armados por la explotación ilegal aurífera”(Malamud, 2018, p.47). En efecto podríamos identificar entonces, cómo a pesar de la creación de leyes y demás acompañamientos, controlar este problema resulta extenso, pues no solo conlleva lo relacionado a la minería ilegal, sino también la presencia de otros factores tales como la presencia de grupos armados, desempleo, entre otras que inducen muchas veces a las personas a realizar este tipo de trabajos.

Teniendo claro lo anterior, hablaremos ahora un poco sobre los residuos de madera, otro problema latente, que sin duda, no es tan conocido para la población Colombiana, como la actividad minera, por lo que en primer lugar, debemos entender qué relación tiene; la madera, pues esta se logra a partir de “la gestión forestal en los bosques como resultado de las prácticas silvícolas y de manejo, con subproductos que generalmente no son extraídos del bosque, estos generan residuos importantes que no se cuantifican y se desconoce su composición” (Asprilla Mosquera, et al 2019, p. 194)

Dicho lo anterior, es importante puntualizar que para el departamento objeto de estudio, “el vertimiento de residuos de la madera es considerado un foco de contaminación en las fuentes hídricas”(Asprilla Mosquera, et al, 2019, p. 195), por lo que vemos nuevamente

el problema referente a la falta de personal capacitado para el desarrollo de estas actividades, ya que “las empresas que transforman la madera emplean maquinaria en mal estado, realizan los procesos de forma artesanal y emplean a personas con un conocimiento limitado de aspectos logísticos de manejo y gestión de los residuos”(Asprilla Mosquera, et al, 2019, p. 195), es por esto que el buen manejo y aprovechamiento de este recurso producto de la explotación depende exclusivamente del Estado, pues en primera medida son ellos quienes deberían aportar los medios necesarios y suficientes, para el respectivo manejo conforme a las normas que expiden, ya que al no garantizar, se podría encontrar un quiebre en cuanto a la participación de estas comunidades, por lo que, es importante mencionar que con la Ley 1448 surge la iniciativa en el artículo 205, la cual fue “subsana el desconocimiento al derecho fundamental de consulta previa de los grupos étnicos, en el proceso legislativo que dio origen a la ley general de víctimas”(Echavarría Rentería & Hinestroza Cuesta, 2016, p. 138). De esta forma mencionando que, si bien el Estado intenta garantizar el reconocimiento y participación de las comunidades, este no ha sido tan efectiva como se espera, pues los resultados demuestran las falencias y quiebres de los mismos.

Antes de terminar, es importante hablar puntualmente de la contaminación respecto del río Atrato, el cual es clave para el desarrollo económico y social del departamento ya que de igual forma se ve relacionado con las dos modalidades de contaminación antes expuesta, ahora bien, la situación allí es un poco más preocupante, pues se “monitorean 4 puntos, entre los tramos comprendidos desde el municipio de Lloro hasta la Plaza de Mercado en Quibdó” (Corporación autónoma regional para el desarrollo sostenible del Chocó codechocó, 2013, p. 38) y este arrojo en cuanto a la calidad del agua que,

Los Coliformes fecales tienen una alta influencia sobre las fuentes disminuyendo la calidad de las aguas, esto es debido a la influencia de las poblaciones que viven en las cercanías de los ríos. El control del Subíndice de Coliformes fecales es importante para la prevención de epidemias (Corporación autónoma regional para el desarrollo sostenible del Chocó codechocó, 2013, p.39).

Además, junto con esto, centrando un problema clave en algunas estaciones, como

Lloró, Samureando y Cabí los sólidos suspendidos totales presentan valores altos, disminuyendo el ICA (Índice Calidad del Agua) de la fuente hídrica debido a que estas son zonas de actividad minera. En el caso de Cabí el problema es mayor porque es la principal fuente receptora de vertimientos de la ciudad de Quibdó y también hay evidencia de actividad minera aguas arriba (2013, p.39).

Sin duda alguna, relacionando los resultados del informe anterior, junto con las problemáticas tratadas en este acápite del proyecto, logramos identificar en primer lugar que, tanto la minería ilegal, como el mal manejo de la madera afecta directamente las fuentes hídricas, en este caso el río Atrato que es de suma importancia para este departamento y el cual es necesario para la redistribución de este recurso vital y es aquí donde todos estos factores se ven directamente ligados, pues tanto la minería como la madera permiten de alguna u otra forma la sostenibilidad de gran parte de las familias dentro de este territorio y al no tener más alternativas recurren a estos tipos de trabajo, lo que genera grandes problemas no solo a nivel personal, sino también social y ecológico, en este sentido falta de protección de derechos en materia laboral pues al no estar regulado ni acompañado por parte del Estado esta práctica nace con un gran vacío normativo.

En materia puntual los residuos de madera y heces fecales, como también los puntos altos de la minería ilegal, los cuales son arrojados a este gran río, dan como resultado un problema en el agua, la cual dicha población consume y es aquí donde el problema se puntualiza aún más, en relación a este acápite, pues teniendo en cuenta que esta población se abastece con el agua de este río, es indudable que el consumo constante de la misma, está caracterizado por la contaminación de acuerdo al estudio mencionado.

Para terminar podemos ver como el estado no puede, ni ha podido garantizar en este caso la garantía de varios derechos, los cuales van inmersos a todas estas situaciones a las que dicha población debe someterse, tal como trabajo, educación y una buena alimentación, ya que si partimos del punto de que el agua es un derecho humano vital, el cual permite la realización de diversos alimentos y otros factores, encontramos que el problema es aún mayor, ya que no solo se infringe el buen acceso a derechos mínimos que cualquier colombiano tiene, sino que, podemos inferir que no se buscan soluciones efectivas, pues si bien se realizan intentos de cambio, su resultado no ha sido posible y esto es más que suficiente para buscar otros medios que permitan solucionar el problema de raíz.

### 3.3 POBREZA

La pobreza es un término que todos conocemos, más sin embargo es un concepto que no muchos sabemos definir ni sustentar mediante una definición clara, pues bien para muchos significa carencia de determinados objetos bien sean materiales o no, entre otros, pero la verdad es que su definición es más clara y específica, ya que “la pobreza es un fenómeno contingente y construido socialmente, y el significado del término varía según las sociedades y con el tiempo”(MacEwan, 2010). Por esta razón, es importante tener claro otro término el cual se ve relacionado con la pobreza, para de esta forma contextualizar más su función y desarrollo; pues bien, el término del cual hablaremos es el INB (Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas) el cual sirve como, “indicador comúnmente utilizado para evaluar la pobreza y la miseria basado en la carencia de al menos una de cinco necesidades básicas” (Cepeda, 2010. p. 16).

Una vez explicado lo anterior, podemos ver la relación directa que existe entre el término de pobreza, pues este, se determina de una manera subjetiva pues depende de la situación o contexto donde se pregunte y además junto con este el concepto referente a el INB el cual permite evaluar la pobreza de acuerdo a diferentes factores, los cuales ya fueron nombrados anteriormente. En este punto debemos hablar de cómo se mide el factor de la pobreza en Colombia y es por esto que debemos aclarar que se realiza de dos formas, los cuales son, en primer lugar la pobreza monetaria y en segundo lugar el índice de pobreza multidimensional, este último entendido como, el método que

Incluye cinco dimensiones, condiciones: 1. Educativas del hogar, 2. Condiciones de la niñez y la juventud, 3. Salud, 4. Trabajo, 5. Acceso a los servicios públicos domiciliarios y 6. Las condiciones de la vivienda, las cuales permiten identificar con mayor exactitud los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza (Villaizon Castro, 2016, p.68,69).

Por lo anterior, es importante tener claro que estos factores logran determinar si un individuo dentro del territorio colombiano se puede considerar pobre o no, pues estos parámetros permiten delimitar lo que sería una vida dentro del rango normal; por tanto,



es momento de puntualizar todas estas perspectivas en el departamento del chocó, pues como ya veremos la pobreza es una palabra clave que caracteriza dicho departamento.

En primer lugar, debemos reconocer que históricamente “el Chocó se ha señalado en la última década como uno de los departamentos más pobres de Colombia. Igualmente, como uno de los menos desarrollados y con mayor desigualdad, con índices económicos y sociales persistentemente por debajo del promedio nacional”, (Peláez, et al,2018, p.24) de igual forma es importante identificar que sus principales actividades económicas son la,

Agricultura, ganadería, pesca, minería de oro y platino, que en su mayoría se desarrollan en condiciones de informalidad generando poco valor agregado para el departamento y mucho daño a la riqueza ambiental representada por los ríos y bosques nativos del departamento (Peláez, et al, 2018, p.24).

Es por esto que tendremos en cuenta como antecedente los estudios realizados referentes a la pobreza monetaria en este sector, desde el año 2016, hasta la actualidad, para así poder observar materialmente si se dieron grandes avances o no. Para el año 2017 el DANE en su Boletín Técnico Pobreza Monetaria, dice que “la pobreza en el Chocó alcanzó una incidencia de 58,7%, mientras que en 2016 fue 59,8%,” (2017, p. 4), por otro lado, en cuanto a la brecha y severidad de la pobreza dice que “el departamento de Chocó registró una severidad de la pobreza de 19,5% frente a 21,0% en 2016” (2017, p. 5). Dicho lo anterior, podemos observar cómo según las estadísticas, existe una disminución en lo referente a lo que se considera pobreza dentro del año 2016 a 2017.

Luego, para el año 2018, el DANE en su Boletín Técnico Pobreza Monetaria Departamental, dice que, el departamento del Chocó mostraron una mayor incidencia de la pobreza monetaria un 61,1%, (2018,p.8) por otro lado en cuanto a la brecha y severidad de la pobreza dice que uno de los departamentos con mayor brecha de la pobreza monetaria durante 2018 fue el Chocó con 32,0%” (2018,p.10); en este punto podemos ver como para el departamento del chocó aumenta nuevamente el porcentaje respecto de lo que se denomina pobreza monetaria y en cuanto a la brecha y severidad de la pobreza aumentó de igual forma significativamente.

Finalmente, para el año 2019, el DANE en su texto pobreza monetaria y multidimensional, hace un estudio por departamentos de manera comparativa, por lo que como resultado arroja lo siguiente y es que una de las ciudades que presentó mayor pobreza monetaria fue Riohacha, con una incidencia aproximada entre el 45% y 50%” (2019, p.10), por otro lado en cuanto a la incidencia de pobreza extrema podemos ver cómo una de las ciudades que presentan mayor pobreza monetaria extrema es Quibdó y se encuentran dentro el rango de incidencia de 16% y 18%” (2019, p.11).

Es por esto que, logramos identificar claramente como la pobreza sigue presente y en aumento constante dentro del departamento del chocó, pues tal como lo muestra el DANE cada año los estudios arrojan resultados negativos lo cual demuestran que las metodologías que se están utilizando para erradicar este problema son insuficiente y deben adoptarse otras medidas que permitan ver una clara solución de acuerdo a este problema latente hace ya tanto tiempo, pues de acuerdo al texto Situación de pobreza extrema: Un caso en Colombia, los autores dicen que “en total, 64 de cada 100 colombianos están en el umbral de pobreza, y algunas regiones, como el Chocó, tienen niveles de pobreza similares a los de los países africanos” (Paternina, et al, 2009, p. 206) lo cual resulta algo alarmante, pues si bien ya se identifica por parte del Estado un problema a esta comunidad en cuanto a la falta de garantías de derechos tales como los que se encuentran en nuestra Constitución Política de 1991, en su capítulo 1. de los derechos fundamentales, los cuales se ven directamente relacionados, pues si existe pobreza, la misma desencadena diversas situaciones y será más difícil la buena aplicación y garantía de los mismos; por último en relación a todo lo anterior debemos hablar de la corrupción un término bastante importante y más en este departamento, pues, “el departamento recibe millones de pesos en transferencias del sistema general de participaciones, y la situación no mejora en salud, educación y agua potable” (Bonet, 2007, p.54), por lo que, es importante hablar en este punto del índice de transparencia departamental estimado por la Corporación Transparencia por Colombia 2015,2016, la cual identificó a la “gobernación del chocó, como uno de los departamentos que requieren mayor atención porque todas sus entidades están clasificadas en alto y muy alto riesgo de corrupción” (2017, p.13), por lo que se ve claramente el conflicto interno existente entre los trabajadores del estado, los cuales no cumplen su fin primordial el cual es servir a la población, ya que, “ las regiones más pobres son más susceptibles a las maquinarias

políticas locales y, por esa vía, tienen un mayor riesgo de que los recursos del Estado caigan presa de los grupos de interés” (Gamarra, 2006, p.29).

En virtud de los resultados, vemos como no se han buscado los medios eficientes para darle un fin definitivo a todo estos problemas antes mencionados, pues a pesar de que si se han buscado mecanismo para solucionarlos y teniendo en cuenta que el Estado los tiene claramente identificados, son sumamente ineficaces pues no se puede concebir que en un periodo de más de 20 años no se haya logrado una disminución notoria para la garantía de los derechos antes nombrados en estas poblaciones y su relación con la pobreza, la cual es punto clave para el desarrollo y avance de una población con educación y más en este caso en una con características tan importantes como el departamento del chocó. Lamentablemente se concluye que los postulados de la constitución de 1991 “no se acompañaron de un componente social, ya que el modelo económico ha traído como consecuencia una exclusión social de carácter estructural” (Carvajal, 2015, p.11).

#### **4. CONCLUSIONES**

En consecuencia, a partir de todo lo expuesto a lo largo del proyecto, podemos percibir o confirmar las dudas planteadas al inicio del mismo, pues tal como lo vimos, el multiculturalismo y reconocimiento son dos factores cruciales para el desarrollo o avance de las comunidades minoritarias en cualquier territorio, ya que estos dos términos permitieron una delimitación en cuanto a su identidad y apego a sus orígenes, relacionando así sus tradiciones, cultura entre otros; además el derecho neoconstitucionalista como la pieza clave que permitió el cambio de perspectiva respecto de los grupos minoritarios, pues con este se empieza una búsqueda más efectiva para brindar garantías judiciales y reconocimientos de ciertos derechos a los grupos vulnerables en este caso bajo el entendido de grupos minoritarios los cuales empezaban a conformar esta diversidad social por llamarlo de alguna manera, pues sin duda, todos estos grandes cambios, se ven contemplados en los tres conceptos claves, nombrados anteriormente y la presencia de tanta variedad cultural, es una de las mayores características del siglo XXI.

Por otro lado, corroboramos que en Colombia, el desarrollo normativo durante los últimos años ha permitido de alguna manera, la inclusión y reconocimiento de la

población afro colombiana, pues, es importante para nosotros reconocer que el estado Colombiano se ha encargado de crear diferentes mecanismos para que los derechos de estas poblaciones sean efectivos, ya que desde sus inicios las problemáticas referente a estos grupos son recurrentes, de igual forma es importante aclarar que todos estos cambios fueron posibles en gran medida por la incursión de la Constitución Política de 1991, pues este fue el camino que permitió darles un espacio, para así participar dentro de todo el ordenamiento jurídico, político y desarrollo social de esta comunidad y en general dentro de todo el territorio.

Además, en cuanto al análisis en el departamento del chocó como punto clave para nuestra investigación, logramos observar como dentro de los tres factores desarrollados, las problemáticas estuvieron y siguen presentes dentro de este territorio, tales como la pobreza la cual se caracteriza por aumentar dos por ciento cada año, o simplemente la falta de presencia por parte del estado en territorios que fueron objeto de conflicto armado o cualquier otro, incluso la falta de capacitación para la población en el desarrollo de sus labores tales como minería, fuente primordial para el desarrollo del departamento, por lo que todo lo anterior nos lleva a inferir que nuestra pregunta central estaría resuelta, ya que a pesar de que el estado colombiano ha buscado reconocer derechos y distribuirlos de manera equitativa, no ha logrado superar la falta de los mismos dentro de los territorios donde dichas comunidades habitan, más específicamente el departamento del chocó. Pues al centrarnos en este territorio, pudimos ratificar que la presencia del estado colombiano es mínima y estas poblaciones caracterizadas por gozar de tradiciones y diversidad cultural, cada vez se encuentra más apartadas de la civilización la cual se supone trae consigo avance y desarrollo y es por esto que debemos tener en cuenta la importancia del acompañamiento por parte del estado colombiano ya que debe caracterizarse por su efectividad, bien sea, mediante la presencia de entes u organizaciones que enseñan e instruyan a estas poblaciones sobre la minería como una de las actividades económicas principales del departamento, también, mayor presencia en relación con la educación, toda vez que, esta permite el desarrollo constante y progresivo de cualquier sociedad y por último, el acompañamiento en cuanto a las secuelas latentes del conflicto, ya que al no estar erradicado, tampoco se ha presentado una disminución en cuanto a la inseguridad para este grupo dentro de sus territorios, por lo que deben atenderse no sólo las necesidades mencionadas anteriormente, sino también, otras problemáticas que se dan en su día a día, pero, que solo serán identificadas si existe una relación estado - grupo más

cercana, para así poder dar una solución efectiva y amigable a esta comunidad, que sin duda enriquecen la diversidad Colombiana.

## **5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- Agudelo-Giraldo, O.A. (2018). La pregunta por el método: Derecho y metodología de la investigación. Bogotá. Editorial: Universidad Católica de Colombia.
- Alto comisionado para la paz. (14 de junio de 2019). Líderes sociales, los protagonistas del Consejo Departamental de Paz y Subcomisión Nacional de Garantías de Seguridad del Chocó. Prensa Alto Comisionado para la Paz. [Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2019/Lideres-sociales-los-protagonistas-del-Consejo-Departamental-de-Paz-y-Subcomisión-Nacional-de-Garantías-de-Seguridad.aspx>
- Alto comisionado para la paz. (14 de septiembre de 2018). Desde Chocó se pide un acuerdo humanitario para que cese la violencia en Colombia. Prensa Alto Comisionado para la Paz. Recuperado de: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2018/Desde-Choco-se-pide-un-acuerdo-humanitario-para-que-cese-la-violencia-en-Colombia.aspx>
- Alto comisionado para la paz. (2019). Objeto del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. [Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/construcion-paz/consejo-nacional-de-paz/Paginas/Consejo-Nacional-de-Paz.aspx>
- Anónimo. (10 de abril de 2018). Colombia se raja en Derechos Humanos, concluyen 500 organizaciones sociales. Choco Territorio de Etnias. Recuperado de: <https://choco.org/colombia-se-raja-en-derechos-humanos-concluyen-500-organizaciones-sociales/>
- Anónimo. (2016). El Baudó, Chocó: dos décadas de intensa guerra. Verdad abierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/el-baudo-choco-dos-decadas-de-intensa-guerra/>
- Anónimo. (2018). Diócesis de Quibdó alerta de nuevo sobre la violencia en el Chocó. El tiempo. Recuperado

De:<https://www.eltiempo.com/vida/religion/diocesis-de-quibdo-alerta-de-nuevo-sobre-la-violencia-en-el-choco-125360>

- Anónimo. (28 de junio de 2013). Las víctimas del chocó reúnen propuestas para el proceso de paz colombiano: COLOMBIA PAZ.EFE News Service . Recuperado de: <https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1372127849?accountid=45660>
- Anónimo. (2019). Denuncian recrudecimiento de la violencia y la crisis humanitaria en Chocó. El Espectador. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/denuncian-recrudecimiento-de-la-violencia-y-la-crisis-humanitaria-en-choco-articulo-850570>
- Arango. R, (N.A). Constitucionalismo Social Latinoamericano, Biblioteca Jurídica Virtual Del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, Recuperadode:[http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/constitucionalismo\\_social.pdf](http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/constitucionalismo_social.pdf)
- Arbeláez, L. (2004). La jurisdicción especial indígena en colombia y los mecanismos de coordinación con el sistema judicial nacional.Consejo Superior de la Judicatura Justicia de paz y derecho indígena: análisis y propuestas de coordinación.(1).7. [Visitado el día 4 de septiembre de 2019]. Recuperado de: <https://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/21LucaArbelaez.pdf>
- Arocha, J.& Dieck, M. et al (1998). Geografía Humana de Colombia Los Afrocolombianos. Los Afrocolombianos -Tomo VI. Bogotá:Editora Guadalupe Ltda.
- Asprilla Echeverría, J.M. (2005). Jóvenes afrocolombianos: Caracterización Sociodemográfica y Aspectos de la Migración Interna. Convocatoria DANE-UNFPA Jóvenes talentos en población y desarrollo. (1st ed).7. Recuperado de : [http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/jovenes\\_afrocolombianos.pdf](http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/jovenes_afrocolombianos.pdf) [Consultado 30 Agost. 2019].
- Asprilla Mosquera, D.B & Escobar Córdoba, J. D.& Cañón Barriga, J. E. & Aguilar Lemus, Y & Maturana Guevara, J. C. (2019). Análisis del aprovechamiento sustentable de los residuos generados en la transformación de madera en dos municipios del departamento del chocó - colombia. Revista Ingeniería y Desarrollo, 37(2), 192-211. Recuperado de: <https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1372127849?accountid=45660>

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2287428999?accountid=45660

- Avila, R. (2016). El Neoconstitucionalismo Andino. Quito, Editorial: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Bonet, J. (2007), ¿Por qué es pobre el chocó?. N 90 ed. Cartagena de Indias: Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. (centro de estudios económicos regionales CEER).[Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de:  
<https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-90.pdf>
- Burgos Claros, O. (2018). Eficacia jurídica del derecho al ambiente sano en acciones contra la minería ilegal de la policía nacional colombiana. Revista Logos, Ciencia & Tecnología, 10(3), 133-147. Recuperado de: <https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2087607900?accountid=45660>
- Cárdenas, M. P. (2016). Industrias culturales "afro pacíficas": Encrucijadas del multiculturalismo en la ciudad de cali, colombia. Antípoda : Revista De Antropología y Arqueología, (24), 75-90. doi:<http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/10.7440/antipoda24>.
- Carpizo, J. (2012). El estado de los derechos de la justicia social. Revista Latinoamericana de Derecho Social, (14), 7.[fecha de Consulta 30 de Agosto de 2019]. ISSN: 1870-4670. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=429640269001>
- Carvajal, J. (2018). El paradigma de la seguridad y las tensiones con los derechos humanos Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 23, supl. 1, Zulia, Venezuela, Universidad del Zulia.
- Carvajal, J. (2016).La Sociología Jurídica en Colombia: Los antecedentes en las facultades de derechos, organizaciones no gubernamentales y el estado. Bogotá. Editorial: Universidad Libre.
- Carvajal, J. (2015). Derecho, seguridad y globalización, Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

- Cepeda, E.L. (2010). El caribe chocoano riqueza ecológica y pobreza de oportunidades. N° 125 ed. Cartagena de Indias: Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. (centro de estudios económicos regionales CEER), [Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de: [http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura\\_finanzas/pdf/DTSER-125.pdf](http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-125.pdf)
- CODECHOCO. (2019). Nuestra Entidad. Mision y Vision,[Visitado el 15 de octubre de 2019] Tomado de: <http://codechoco.gov.co/portalwp/#entidad>
- Colombia una nación multicultural: su diversidad étnica. (2005). 1st ed. [Libro electronico] Bogotá: No Disponible, p.13. Disponible en : [http://www.dane.gov.co/files/censos/presentaciones/grupos\\_etnicos.pdf](http://www.dane.gov.co/files/censos/presentaciones/grupos_etnicos.pdf) [Consultado 30 Agost. 2019].
- Corporación autónoma regional para el desarrollo sostenible del chocó codechocó (2013). Proyecto manejo integral del recurso hídrico en el departamento del chocó, índices de calidad de agua y contaminación de las fuentes medidas y monitoreadas.(1). 38-57. [Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de: [https://www.codechoco.gov.co/sites/documentos/laboratorio/informe\\_calidad\\_agua\\_2012.pdf](https://www.codechoco.gov.co/sites/documentos/laboratorio/informe_calidad_agua_2012.pdf)
- DANE (2005). Colombia una nación multicultural: Su diversidad étnica. (1st ed).[Archivo PDF]. Bogotá: No Disponible,13.[Consultado 30 de Agosto 2019]. Recuperadode: [http://www.dane.gov.co/files/censos/presentaciones/grupos\\_etnicos.pdf](http://www.dane.gov.co/files/censos/presentaciones/grupos_etnicos.pdf)
- DANE (2017). Pobreza Monetaria Chocó Año 2017, Boletín Técnico. Bogota D.C, [Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de:[https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones\\_vida/pobreza/2017/Choco\\_Pobreza\\_2017.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Choco_Pobreza_2017.pdf)
- DANE (2018). Pobreza Monetaria Departamental, Boletín Técnico. Bogota D.C, [Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de : [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones\\_vida/pobreza/2018/bt\\_pobreza\\_monetaria\\_18\\_departamentos.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetaria_18_departamentos.pdf)
- DANE (2019). Pobreza Monetaria y Multidimensional. Boletín Técnico. Bogota D.C, [Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de: [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones\\_vida/pobreza/2018/pres\\_pobreza\\_2018.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/pres_pobreza_2018.pdf)



- Departamento Nacional de Planeación (1997). Programa de apoyo para el desarrollo y reconocimiento étnico de las comunidades negras. Documento conpes 2909 - mininterior - consejería para la política social - comisión consultiva de alto nivel dnp:upru.(1). [Visitado el día 4 de septiembre de 2019], Recuperado de: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2909.pdf>
- Departamento Nacional de Planeación. (2002). Política para la población Colombiana.Documento Conpes 3169 Consejo Nacional de Política Económica y Social . (1). [Visitado el día 4 de septiembre de 2019], Recuperado de: <https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Conpes/Conpes%203169%20de%202012.pdf>
- Echavarria Rentería, Y. L & Hinestroza Cuesta, L. (2016). Análisis del marco jurídico para la reparación colectiva a grupos étnicos en colombia: Caso comunidades negras del chocó. Revista Estudios De Derecho, 73(161), 125-154. doi:<http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatossezproxy.com/10.17533/udea.esde.v73n161a07>
- Gamarra, J. R. (2006). Pobreza, corrupción y participación política: una revisión para el caso colombiano. N 70 ed. Cartagena de Indias: Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. (centro de estudios económicos regionales CEER),[Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de:[http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura\\_finanzas/pdf/DTSER-70\\_%28VE%29.pdf](http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-70_%28VE%29.pdf)
- Grueso, L & Mow, J. & Robinson, D & Viáfara,C.A. (2007). Propuestas para el capítulo fortalecimiento de los grupos étnicos y de las relaciones interculturales del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Plan integral de largo plazo para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal.(1). 4. [Visitado el día 4 de septiembre de 2019]. Recuperado de: [https://intranet.meta.gov.co/secciones\\_archivos/864-35842.pdf](https://intranet.meta.gov.co/secciones_archivos/864-35842.pdf)
- Hermosa Mantilla, H. (2014).El neoconstitucionalismo andino. Estudio comparado de las Constituciones de Ecuador 2008 y Bolivia 2009 a la luz del Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Revista de ciencias sociales y humanas Universitas, 12 (20), 151-182.
- Hernández Romero, A & Salamanca Rodríguez, L. & Ruiz García F. (2007). Colombia una Nación Multicultural, su diversidad étnica.[Archivo

PDF]DANE(Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Bogota D.C.[Consultado 30 Agosto. 2019]. Recuperado de: [http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia\\_nacion.pdf](http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf)

- Kymlicka, W. (1996). Multicultural citizenship. A liberal theory of minority rights. Ciudadanía multicultural: Una teoría liberal de los derechos de las minorías. (1). Barcelona: Paidós,10.Recuperado de: [https://www.academia.edu/31489607/Ciudadan%C3%ADa\\_multicultural\\_Una\\_teor%C3%ADa\\_liberal\\_de\\_los\\_derechos\\_de\\_las\\_minor%C3%ADas\\_Will\\_Kymlicka\\_Editorial\\_Paid%C3%B3s\\_T%C3%ADtulo\\_original\\_Multicultural\\_citizenship.\\_A\\_liberal\\_theory\\_of\\_minority\\_rights](https://www.academia.edu/31489607/Ciudadan%C3%ADa_multicultural_Una_teor%C3%ADa_liberal_de_los_derechos_de_las_minor%C3%ADas_Will_Kymlicka_Editorial_Paid%C3%B3s_T%C3%ADtulo_original_Multicultural_citizenship._A_liberal_theory_of_minority_rights)[Consultado 30 Agosto. 2019].
- Laurent, V. (2016). Élite(s) e indianidad en colombia: Retos de democracia en contexto de multiculturalismo. Revista Colombia Internacional, (87), 145-169. Recuperadode:<http://ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2117/10.7440/colombiaint87.2016.06>
- MacEwan, A. (2010). El significado de la pobreza: cuestiones de distribución y poder. Investigación económica, 69(272), 15-56. [Visitado 21 de octubre de 2019].Recuperado de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0185-16672010000200002&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672010000200002&lng=es&tlng=es).
- Malamud, M. (2018). Economías ilícitas en la amazonia: Un desafío para la gobernabilidad en Perú, Brasil y Colombia. Revista De Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, 12(1), 34-47. doi:<http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/10.3232/GCG.2018.V12.N1.01>
- Mendieta, D. & Tobón, M. L. (2018). Human dignity and social and democratic state of law: The Colombian case. Revista De Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, 10(3), 278-289. Recueprado de: <https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2210396536?accountid=45660>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016). Noticias Minambiente, Minería ilegal en el Chocó está acabando con sus ecosistemas,(1).[Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de:

<http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/2308-mineria-illegal-en-el-choco-esta-acabando-con-sus-ecosistemas-minambiente>

- Noguera Fernández, A. & Criado, D.M. (2011). La Constitución colombiana de 1991 como punto de inicio del nuevo constitucionalismo en América Latina”, *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 13,(1), (pp. 15-49.). Recuperado de: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/1506>
- Osorio, J. D. A. (2017). Falsos dilemas del neoconstitucionalismo. *Revista Estudios de Derecho*, 74(163), 19-46. doi:<http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/10.17533/udea.esde.v74n1>
- Pardo guzman, T & Giraldo, M. et al. (2012). Afrocolombianos Sus territorios y condiciones de vida. Colección Cuadernos Indh. [Archivo PDF]. Bogotá, Colombia. [Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de: <https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-cuadernoafro-2012.pdf>
- Paternina, E. C. & Montes, L. M. & Forbes, E. & Martínez, C. (2009). Situación de pobreza extrema: Un caso en colombia. *Revista Salud Uninorte*, 25(2). Recuperado de: <https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1436243395?accountid=45660>
- Peláez thompson, S.M & Vásquez Duque ,A.M. (2018). Evolución y causas de la pobreza en el departamento del chocó durante el siglo xxi.(Tesis de grado). [Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado de :<http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/6629/1/2131088-2018-1-EF.pdf>
- Peláez-Grisales, H. (2017). El significado ambivalente del reconocimiento del derecho a la especial protección en Colombia, 134. *Universitas*, 249-290. doi:10.11144/Javeriana.vj134.sard
- Porras Nadales, A. J. (2017). Desarrollo constitucional y globalización. *Revista De Fomento Social*, (287), 407-421. doi:<http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/10.32418/rfs.2017.287-288.1448>
- Portales, R. A. (2012). Políticas del multiculturalismo, inmigración y derechos diferenciales en el nuevo contexto global/policies of the multiculturalism,

immigration and differential rights in the new global context. Revista De Derecho UNED, (11), 919-949. Recuperado de: <https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatossezproxy.com/docview/1466128296?accountid=45660>

- Redacción BBC. (3 de octubre de 2016). Bojayá, la población donde las FARC cometieron una de sus peores masacres y que votó abrumadoramente por el Sí. BBC Mundo. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37541772>
- Restrepo, E. (2007). El "giro al multiculturalismo" desde un encuadre afro-indígena. Revista The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 12(2), 475-486. Tomado de: <http://ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2053/docview/205485108?accountid=45660>
- Rivas, P. L. (2015). Análisis de las afectaciones socioambientales producto de la explotación minera aurífera en la parte central de la cuenca del río san pablo, municipio del canton del san pablo; Departamento del Chocó.(Tesis de Maestría). Recuperado de: <http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2440>
- Robledo Martínez, F. A. (2015). Identidad cultural, salud social y estado social de derecho. el caso "tesoro quimbaya" quindío, colombia. Revista De Salud Pública = Journal of Public Health, 17(4), 636-n/a. Recuperado de: <https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatossezproxy.com/docview/1755264183?accountid=45660>
- Rodríguez,G.A. (2008). Quienes son los afrocolombianos . Diálogos de Saberes, Investigación en derecho y ciencias sociales. Revista No 29. P. 220.
- Sousa santos, B. (2000). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. El otro derecho, 28(1) , Bogotá D.C., Colombia. Recuperado de: [http://www.uba.ar/archivos\\_ddhh/image/Sousa%20-%20Concepción%20multicultural%20de%20DDHH.pdf](http://www.uba.ar/archivos_ddhh/image/Sousa%20-%20Concepción%20multicultural%20de%20DDHH.pdf)
- Sousa santos, B.(2003). Ensayos para una nueva teoría social Colección En Clave de Sur. La caída del angelus novus. (1ed). Bogotá D.C. Colombia. 110. Recuperado de: [http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/La%20caida%20del%20angelus%20novus\\_ILSA.pdf](http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/La%20caida%20del%20angelus%20novus_ILSA.pdf)

- Spindler, W. (2016). Aumenta el desplazamiento forzado en el departamento del Chocó, en el oeste de Colombia. Notas de prensa ACNUR. Recuperado de: <https://www.acnur.org/noticias/briefing/2016/5/5af306d313/aumenta-el-desplazamiento-forzado-en-el-departamento-del-choco-en-el-oeste-de-colombia.html>
- Taylor, C. (1993). El multiculturalismo y “las políticas del reconocimiento”, México D.F.: Fondo de Cultura Económica. [Consultado 30 de Agosto 2019], Recuperado de: <https://seminariosocioantropologia.files.wordpress.com/2014/03/elmulticulturalismoylapoliticadelreconocimientocharlestaylor.pdf>
- Unidad de Víctimas. (2019). Red Nacional de Información. Víctimas del conflicto armado, Desplazamiento personas, territorio del Chocó, [Visitado el 15 de octubre de 2019], Recuperado: <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento>
- Urrega, G.F. (2005). Seminario Internacional, Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información sociodemográfica para políticas y programas, La población afrodescendiente en Colombia, CEPAL, Santiago de Chile, Recuperado de: <https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/5/27905/FUrrea.pdf>
- Villaizón Castro, E. Y. (2016). Evolución metodológica de la medición de la pobreza en Colombia. Revista Inclusión & Desarrollo, 3(1), 66-73. doi:<http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatos.ezproxy.com/10.26620/uniminuto.inclusion.3.1.2016.66-73>
- Viveros Vigoya, M. & Lesmes Espinel, S. (2014). Cuestiones raciales y construcción de nación en tiempos de multiculturalismo. Universitas Humanística, 77(77). Recuperado de: <http://ezproxy.ucdc.ucatolica.edu.co:2053/docview/1771619121?accountid=45660>

## LEYES Y JURISPRUDENCIA

- Congreso de la República de Colombia (1991). Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la

O.I.T., Ginebra 1989. [LEY 21 DE 1991] DO: 39.720, Tomado de : <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37032>

- Congreso de la República de Colombia (1968). Por la cual se aprueban los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966. [LEY 74 DE 1968] DO: 32682, Tomado de: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1622486>
- Congreso de la República de Colombia (1981). Por medio de la cual se aprueba "La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965 y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966. [LEY 22 DE 1981] DO: 35711, Tomado de: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1578189>
- Constitución Política de Colombia. [Const.](1991). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)
- Congreso de la República de Colombia. (1994). Mecanismos de Participación Ciudadano.[Ley 134 de 1994].DO:41.373, Tomado de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330>
- Congreso de la República de Colombia (1993).Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.[Ley 70 de 1993] DOI: 41013, Tomado de: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1620332>
- Congreso de la República de Colombia (1993). Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones. [ Ley 99 de 1993] DOI: 41146, Tomado de: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297>
- Congreso de la República de Colombia (1998).Por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, se otorgan funciones y se dictan otras disposiciones. [Ley 434 de 1998] DOI:43.231, Tomado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0434\\_1998.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0434_1998.html)

- Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión (03 de junio de 1992) Sentencia T 401[ MP Eduardo Cifuentes Muñoz]
- Presidente de la República de Colombia. (27 de septiembre de 2011)Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.[ Decreto 3570 de 2011].
- Congreso de la República. (09 de febrero de 2010). Ley que modifica la ley 685 de 2001 código de minas. [ Ley 1382 de 2010] DO: 47.618
- Congreso de la República. (16 de junio de 2011). Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. [ Ley 1450 de 2011] DO: 48.102
- Corte Constitucional, Sala Plena (09 de mayo de 2012)Sentencia C 331 [ MP LUIS ERNESTO VARGAS SILVA]